

**TRATADO EN MATERIA DE ASISTENCIA JURÍDICA PENAL ENTRE
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA**

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, en adelante denominados "las Partes Contratantes";

DESEANDO mejorar y reforzar la cooperación en el campo de la asistencia jurídica en materia penal;

INTERESADOS en asegurar que la asistencia jurídica en materia penal entre las Partes Contratantes se lleve a cabo de manera rápida y eficaz, de conformidad con los principios del derecho internacional;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Alcances de la Asistencia Jurídica

1. Las Partes Contratantes se comprometen a prestarse mutuamente la más amplia asistencia jurídica en materia penal para la investigación y persecución de los delitos, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y su respectiva legislación nacional.

2. Dicha asistencia comprenderá, en particular:

- a) la notificación de citatorios o de otras actuaciones judiciales;
- b) la obtención de actuaciones y documentos o, de ser así solicitado, la información sobre su contenido;
- c) la recepción de testimonios y de interrogatorios;
- d) la realización de peritajes;

- e) las demás actividades de práctica de pruebas, incluyendo la realización de inspecciones, de exámenes de lugares y personas, de cateos y de registros;
- f) el aseguramiento y el decomiso de ganancias, productos y cualquier objeto relacionado a un hecho delictivo;
- g) la transmisión de sentencias penales, de certificados de antecedentes penales y de información extraída de los archivos judiciales;
- h) el citatorio de testigos, partes ofendidas, personas sometidas a un procedimiento penal, peritos para comparecer voluntariamente ante la autoridad competente del Estado Requirente;
- i) cualquier otra forma de asistencia, de conformidad con el objeto de este Tratado, siempre y cuando no contravenga la legislación nacional del Estado Requerido.

3. La asistencia no comprenderá la ejecución de órdenes restrictivas de la libertad personal ni la ejecución de penas o medidas coercitivas.

4. El cumplimiento de los actos requeridos podrá ser presenciado por representantes de la autoridad competente del Estado Requirente, el cual remitirá la relación de los nombres y cargos de sus representantes, con un plazo razonable de anticipación a la fecha de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica con el objeto de hacer todas las gestiones necesarias al respecto.

5. El presente Tratado no faculta a las autoridades competentes del Estado Requirente para ejercer en la jurisdicción territorial del Estado Requerido, funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a sus autoridades de conformidad con su legislación nacional.

ARTÍCULO 2

Doble Criminalidad

1. La asistencia jurídica se podrá prestar inclusive cuando el hecho por el que se solicita no constituya un delito en el Estado Requerido.

2. No obstante, cuando la solicitud de asistencia se refiera a la ejecución de cateos, incautaciones, decomiso de bienes y otras actuaciones que incidan en derechos fundamentales de las personas o resulten invasivas hacia lugares o cosas, la asistencia sólo se prestará si el hecho por el que se procede está previsto como delito también por la legislación nacional del Estado Requerido.

ARTÍCULO 3

Denegación o Aplazamiento de la Asistencia Jurídica

1. La asistencia jurídica podrá ser denegada en los siguientes casos:
 - a) cuando el cumplimiento de la solicitud sea contrario a la legislación nacional del Estado Requerido o no se ajuste a las disposiciones del presente Tratado o sea contrario a las obligaciones internacionales del Estado Requerido;
 - b) cuando el delito por el que se solicita sea castigado por el Estado Requiriente con una pena prohibida por la legislación del Estado Requerido;
 - c) cuando el delito por el cual se solicita está considerado conforme a la legislación del Estado Requerido como un delito exclusivamente militar, político o como un delito conexo a éste. Para tal efecto, no se considera delito político:
 - i) el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de gobierno o de un miembro de su familia;
 - ii) los delitos de terrorismo, ni cualquier otro delito excluido de tal categoría de conformidad con los tratados, convenios, o acuerdos internacionales de los que ambos Estados sean partes;
 - d) si el Estado Requerido tiene motivos fundados para creer que cuestiones relativas a la raza, religión, sexo, nacionalidad, idioma, opiniones políticas o condiciones personales o sociales constituyen el fundamento de la solicitud de asistencia o que la situación de la persona respecto de la cual se solicita puede resultar perjudicada por cualquiera de esas cuestiones;

- e) si en contra de la persona por la que se solicita ya ha sido emitida una sentencia definitiva por el mismo hecho en el Estado Requerido, siempre y cuando la persona no haya evadido, en caso de haber sido condenada, la ejecución de la pena;
- f) si el Estado Requerido considera que la ejecución de la solicitud de asistencia puede perjudicar su soberanía, su seguridad, el orden público u otros intereses nacionales esenciales;
- g) si la solicitud de asistencia no cumple con los requisitos a que se refiere el presente Tratado.

2. La asistencia podrá ser denegada si la ejecución de los actos requeridos interfiere con una investigación o un procedimiento penal en curso en el Estado Requerido. Dicho Estado, de cualquier manera, podrá proponer que la ejecución de los actos requeridos sea diferida o sometida a determinadas condiciones.

3. Si el Estado Requerido deniega o aplaza la asistencia jurídica lo informará al Estado Requirente de manera inmediata, motivando la denegación o el aplazamiento.

4. Antes de denegar una solicitud o de aplazar su ejecución, el Estado Requerido tendrá la facultad de evaluar si la asistencia puede ser concedida bajo determinadas condiciones. Si el Estado Requirente acepta la asistencia bajo esas condiciones, estará obligado a respetarlas.

5. El secreto bancario o tributario no podrá ser utilizado como argumento para denegar la asistencia jurídica.

ARTÍCULO 4

Ejecución de la Solicitud de Asistencia Jurídica

1. El cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica se llevará a cabo de conformidad con la legislación nacional del Estado Requerido y de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado.

2. La práctica de las pruebas requeridas y su transmisión al Estado Requirente se realizarán a la brevedad.

3. Si el Estado Requirente lo solicita expresamente, el Estado Requerido le informará sobre la fecha y el lugar de ejecución de los actos requeridos.

ARTÍCULO 5

Inmunidad y Prerrogativas

1. Si la persona relacionada con la solicitud de asistencia jurídica, invoca inmunidad, prerrogativa, derechos o incapacidad según la legislación nacional del Estado Requerido, esta invocación será resuelta por la autoridad competente del Estado Requerido con anterioridad al cumplimiento de la solicitud y el resultado será comunicado al Estado Requirente por medio de la Autoridad Central.

2. Si la persona invoca inmunidad, prerrogativa, derechos o incapacidad según la legislación nacional del Estado Requirente, tal invocación será informada por medio de las respectivas Autoridades Centrales, a fin de que las autoridades competentes del Estado Requirente resuelvan al respecto.

ARTÍCULO 6

Confidencialidad y Límites en el Empleo de la Información

1. Los Estados mantendrán la confidencialidad de la solicitud de asistencia y las actuaciones relativas.

2. El Estado Requirente no utilizará ninguna información, actuación o documento obtenidos en la ejecución del presente Tratado para fines distintos a los especificados, salvo que requiera el consentimiento del Estado Requerido, el cual podrá acceder o denegar, total o parcialmente, lo solicitado.

ARTÍCULO 7

Notificación de Actuaciones

1. El Estado Requerido notificará sin demora todos los documentos que le sean transmitidos para tal finalidad.

2. La solicitud que tenga por objeto la notificación de actuaciones será transmitida con razonable anticipación a la fecha en que las actuaciones deban llevarse a cabo.

3. El Estado Requerido acreditará el cumplimiento de la notificación por medio de un documento de entrega, fechado y firmado por el destinatario, o por medio de una declaración de la autoridad competente del propio Estado Requerido haciendo constar el hecho, la fecha y la forma de notificación y entrega.

ARTÍCULO 8

Transmisión de Actuaciones

1. Cuando la solicitud de asistencia tenga por objeto la transmisión de actuaciones o documentos, el Estado Requerido tendrá la facultad de transmitir copias certificadas de los mismos, salvo que el Estado Requirente solicite los originales.

2. Los documentos y las actuaciones originales transmitidos al Estado Requirente serán devueltos al Estado Requerido tan pronto como sea posible, cuando este último así lo solicite.

ARTÍCULO 9

Cateos, Incautaciones y Decomisos

1. El Estado Requerido, a solicitud del Estado Requiriente, llevará a cabo las diligencias e investigaciones requeridas para averiguar si en su territorio se hallan ganancias del delito u objetos relacionados con éste y comunicará al Estado Requiriente los resultados de las mismas. Al formular la solicitud, el Estado Requiriente comunicará al Estado Requerido los motivos para considerar que en el territorio de este último pueden hallarse ganancias del delito u objetos relativos al delito.

2. Una vez localizadas las ganancias de delito u los objetos relacionados con éste, de conformidad con el numeral 1 del presente Artículo, el Estado Requerido, a solicitud del Estado Requiriente, adoptará las medidas previstas en su legislación nacional a fin de inmovilizar, incautar y decomisar las ganancias de delito y los objetos relacionados con éste.

3. A solicitud del Estado Requiriente, el Estado Requerido transferirá al Estado Requiriente, total o parcialmente, las ganancias del delito y los objetos relacionados con éste o bien las sumas obtenidas de la venta de dichos bienes, bajo las condiciones que sean acordadas por ambos Estados.

4. En la aplicación del presente Artículo, deberán respetarse en todo momento los derechos del Estado Requerido y de terceros, sobre dichas ganancias del delito u objetos relacionados con éste.

ARTÍCULO 10

Comparecencia de Personas en el Territorio del Estado Requerido

1. El Estado Requerido obtendrá en su territorio, de conformidad con su legislación nacional, las declaraciones de testigos, partes ofendidas, personas sometidas a un procedimiento penal, peritos, las actuaciones, los documentos, los objetos y las demás pruebas mencionadas en la solicitud de asistencia jurídica y los transmitirá al Estado Requiriente.

2. Previa solicitud del Estado Requirente, la Autoridad Central del Estado Requerido informará, de conformidad con su propia legislación, a la Autoridad Central del otro Estado la fecha, hora y lugar donde se realizará la recepción del testimonio o prueba respectiva.

3. A efecto de ejecutar la solicitud de asistencia jurídica, la autoridad competente del Estado Requerido notificará, mediante citatorio, a la persona cuya presencia se requiera para que sea oída o presente documentos u objetos, procediendo con las mismas modalidades que adopta para las investigaciones o los procedimientos judiciales de conformidad con su propia legislación nacional.

4. La persona a escuchar será auxiliada en caso de necesidad por un intérprete y podrá reservarse el derecho a contestar cuando la legislación del Estado Requerido o del Estado Requirente lo permita.

5. El Estado Requirente cumplirá cualquier condición acordada con el Estado Requerido relativa a los documentos u objetos que éste le entregue, incluyendo la protección del derecho de terceros sobre tales documentos y objetos.

ARTÍCULO 11

Comparecencia de Personas en el Territorio del Estado Requirente

1. Cuando el Estado Requirente solicite la comparecencia, en calidad de testigo, parte ofendida, persona sometida a procedimiento penal, perito, de una persona que se encuentre en el territorio del Estado Requerido, para la realización de actuaciones procesales ante las autoridades competentes del propio Estado Requirente, el Estado Requerido invitará a la persona a comparecer en los términos señalados en la solicitud de asistencia jurídica formulada.

2. La persona, cuando se encuentre en el territorio del Estado Requirente, gozará de las siguientes garantías:

- a) no se le aplicará ninguna medida coercitiva o sanción en caso de que no comparezca ante la autoridad competente;
- b) no será procesada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de la libertad personal por el Estado Requirente por cualquier hecho delictivo cometido previamente a su salida del territorio del Estado Requerido. Sin embargo, será responsable por el contenido de la declaración testimonial o del dictamen pericial que rinda. Dicha garantía no tendrá aplicación si la persona, estando en libertad para abandonar el territorio del Estado Requirente, no lo abandona en un periodo de treinta (30) días después de que oficialmente se le haya notificado que ya no se requiere su presencia o si, habiendo partido, regresa voluntariamente al territorio del Estado Requirente;
- c) no estará obligada a declarar en otros procedimientos distintos al que se refiere la solicitud de asistencia jurídica.

3. El Estado Requerido notificará a la persona a ser trasladada mediante un citatorio que deberá contener la indicación de las garantías a que se refiere el numeral anterior y la información de que los gastos del traslado corresponderán al Estado Requirente.

4. El Estado Requerido no podrá aplicar sanciones ni adoptar medida coercitiva alguna respecto de la persona que no comparezca al citatorio.

ARTÍCULO 12

Comparecencia Mediante Videoconferencia

1. Si una persona se encuentra en el territorio del Estado Requerido y tiene que ser escuchada en calidad de testigo o perito por las autoridades competentes del Estado Requirente, este último podrá pedir que la entrevista se efectúe a través de videoconferencia.

2. La comparecencia mediante videoconferencia podrá ser solicitada también para el interrogatorio de personas sujetas a un procedimiento penal de conformidad con la legislación del Estado Requerido. En este caso el defensor podrá estar presente sea en el lugar donde se encuentra la persona que comparece o ante la autoridad competente del Estado Requirente, en cuyo caso deberá poder comunicarse a distancia en forma reservada con su asistido.

3. La comparecencia mediante videoconferencia se llevará a cabo siempre que la persona que debe ser escuchada o interrogada se encuentre detenida en el territorio del Estado Requerido, y en la medida de las posibilidades técnicas de éste.

4. Los gastos relacionados con la videoconferencia serán reembolsados por el Estado Requirente al Estado Requerido, a menos que este último renuncie total o parcialmente al reembolso.

ARTÍCULO 13

Traslado Temporal de Personas Detenidas

1. Cuando de conformidad con el Artículo 12, no fuere posible realizar la videoconferencia, el Estado Requerido, a solicitud del Estado Requirente, tendrá la facultad de trasladar temporalmente al Estado Requirente a una persona detenida en su propio territorio a fin de permitir su comparecencia ante una Autoridad competente del Estado Requirente para que rinda interrogatorio, testimonio u otro tipo de declaraciones, o bien para participar en otras actuaciones procesales, previo acuerdo por escrito entre los Estados con respecto al traslado y a sus condiciones.

2. El traslado temporal de la persona podrá ser ejecutado a condición de que:

- a) no interfiera con investigaciones o procedimientos penales en curso en el Estado Requerido, en los que deba intervenir dicha persona;

- b) la persona trasladada se mantenga privada de la libertad por el Estado Requirente;
- c) La persona detenida deberá dar su consentimiento en el caso en que se deba proceder a su interrogatorio.

3. El periodo transcurrido en situación de privación de libertad en el Estado Requirente será computado para los efectos de la ejecución de la pena impuesta en el Estado Requerido.

4. Cuando para la ejecución del traslado temporal se prevea el tránsito de la persona detenida a través del territorio de un tercer Estado, el Estado Requirente presentará, de ser necesaria, la solicitud de tránsito respectiva a las Autoridades competentes del tercer Estado e informará oportunamente al Estado Requerido del resultado de la misma, transmitiendo la documentación correspondiente.

5. El Estado Requirente regresará a la persona trasladada inmediatamente al Estado Requerido, una vez que se hayan concluido las actuaciones procesales a las que se refiere el numeral 1 del presente Artículo o bien al vencerse el plazo específicamente acordado por las Autoridades Centrales de ambos Estados.

6. Para los efectos de este Artículo, resultarán aplicables las disposiciones contenidas en el Artículo 11, numeral 2.

ARTÍCULO 14

Protección de Personas Citadas o Trasladas a la Parte Requirente

Quando sea necesario, la Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas o trasladadas a su territorio.

ARTÍCULO 15

Intercambio de Información sobre los Procedimientos Penales

El Estado Requerido transmitirá al Estado Requirente, para los fines del procedimiento penal en el cual se formule la solicitud, la información sobre los procedimientos penales, los antecedentes penales y las condenas impuestas en su propio país respecto de nacionales del Estado Requirente.

ARTÍCULO 16

Intercambio de Información sobre la Legislación

Previa solicitud, los Estados se intercambiarán información sobre la legislación vigente o que se encontraba previamente en vigor y sobre los procedimientos judiciales en curso en sus respectivos países.

ARTÍCULO 17

Transmisión de Sentencias y Certificados de Antecedentes Penales

1. Cuando el Estado Requerido trasmita una sentencia penal, deberá proporcionar también las indicaciones relativas al procedimiento respectivo, en caso de haber sido solicitadas por el Estado Requirente.

2. Los certificados de antecedentes penales necesarios para la autoridad judicial del Estado Requirente en un procedimiento penal, serán trasmitidos a dicho Estado si en las mismas circunstancias podrían ser otorgados a las autoridades competentes del Estado Requerido.

ARTÍCULO 18

Solicitudes de Asistencia

1. La asistencia será proporcionada a solicitud previa y escrita del Estado Requirente.

2. El Estado Requerido procederá inmediatamente al cumplimiento de la solicitud de asistencia tan pronto como la reciba por fax, correo electrónico u otro medio de transmisión telemática análogo. El Estado Requirente transmitirá el original de la solicitud dentro de los diez (10) días siguientes. El Estado Requerido comunicará al Estado Requirente los resultados de la ejecución de la solicitud de asistencia sólo después de haber recibido el original de dicha solicitud.

3. La solicitud deberá indicar:

- a) la autoridad competente que origina la solicitud;
- b) los datos de la investigación o del procedimiento penal a los que se refiere la solicitud y los datos generales de la persona contra la que se procede;
- c) los actos cuyo cumplimiento se solicita;
- d) la descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal;
- e) las disposiciones penales aplicables al caso;
- f) cualquier otra información necesaria o útil para la ejecución de los actos requeridos y, en particular, para la identificación y ubicación del lugar donde se encuentra la persona a que se refiere la solicitud;
- g) las formas y las modalidades particulares eventualmente solicitadas para la ejecución de los actos, además de las generalidades de las autoridades y de los particulares que pudieran participar en los mismos;
- h) el plazo dentro del cual el Estado Requirente considera más oportuno y/o conveniente que la solicitud de asistencia sea cumplida;
- i) en su caso, la petición para que representantes de las autoridades competentes del Estado Requirente presencien el cumplimiento de los actos requeridos.

4. La solicitud de asistencia también contendrá en la medida de lo posible, información sobre:

- a) el nombre completo, la fecha de nacimiento, el domicilio, el número de teléfono de las personas a las cuales deba efectuarse una notificación y su relación con la investigación o procedimiento penal en curso;
- b) la ubicación y la descripción del lugar a registrar o inspeccionar;
- c) la ubicación y la descripción de los bienes a asegurar o decomisar;
- d) las preguntas a ser formuladas al testigo o al perito;
- e) cualquier otra información que pueda ser útil para el Estado Requerido en el cumplimiento de la solicitud de asistencia.

5. Si el Estado Requerido estima que el contenido de la solicitud no es suficiente para satisfacer las condiciones del presente Tratado, tendrá la facultad de solicitar ulterior información.

ARTÍCULO 19

Modalidades de Transmisión

1. Las solicitudes de asistencia jurídica serán enviadas a través de las Autoridades Centrales de los Estados.

2. La Autoridad Central para los Estados Unidos Mexicanos será la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica. La Autoridad Central para la República Italiana será el Ministerio de Justicia, Departamento de Justicia, Dirección General de Justicia Penal.

3. Cada Parte Contratante comunicará a la Otra las eventuales modificaciones de la Autoridad Central por conducto diplomático.

ARTÍCULO 20

Idioma

Las solicitudes de asistencia jurídica así como las actuaciones y los documentos anexos deberán acompañarse de la traducción al idioma del Estado Requerido, y deberán estar firmados y contener los sellos oficiales de las autoridades competentes del Estado Requirente.

ARTÍCULO 21

Gastos

Quedarán a cargo del Estado Requerido los gastos relacionados con la ejecución de la solicitud de asistencia, salvo lo previsto en el Artículo 11, numeral 3, y en el Artículo 12, numeral 4, del presente Tratado.

ARTÍCULO 22

Relaciones con otros Instrumentos Internacionales

El presente Tratado se aplicará sin perjuicio de aquellas disposiciones que resulten más favorables y se encuentren contenidas en otros instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales vigentes para las Partes Contratantes, ni de las eventuales disposiciones más favorables de asistencia jurídica en materia penal que se establezcan en la legislación nacional de los Estados.

ARTÍCULO 23

Otros Instrumentos de Cooperación

El presente Tratado no impedirá a los Estados prestarse otras formas de cooperación o asistencia jurídica en virtud de acuerdos específicos, de entendimientos o de prácticas compartidas, de ser conformes a sus ordenamientos jurídicos respectivos y a los tratados internacionales de los que sean partes.

ARTÍCULO 24

Solución de Controversias

1. Las Autoridades Centrales de los Estados, a propuesta de uno de ellos, celebrarán consultas en materia de interpretación o aplicación de las disposiciones de este Tratado.
2. Cualquier controversia sobre la interpretación y la aplicación del presente Tratado será resuelta mediante consulta entre las Autoridades Centrales.
3. En caso de que éstas no lleguen a un acuerdo, la controversia será resuelta mediante consultas a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 25

Entrada en Vigor, Modificación y Terminación

1. El presente Tratado entrará en vigor el trigésimo (30) día después de la fecha de recepción de la segunda notificación intercambiada entre las Partes Contratantes, a través de los canales diplomáticos, comunicando el cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos necesarios para tal efecto.
2. El presente Tratado podrá ser modificado en cualquier momento por acuerdo escrito entre las Partes Contratantes. Dichas modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 del presente Artículo, y formarán parte integrante de este Tratado.
3. El presente Tratado permanecerá en vigor de manera indefinida. Sin embargo, cualquiera de las Partes Contratantes podrá darlo por terminado, en cualquier momento, mediante comunicación escrita dirigida a la otra Parte Contratante, por los canales diplomáticos. La terminación surtirá efectos ciento ochenta días (180) días después de la fecha de dicha comunicación. La terminación del Tratado no afectará el desahogo de las solicitudes iniciadas durante su vigencia.

4. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud formulada a partir de su entrada en vigor, inclusive en caso de que los delitos por los cuales se solicita la asistencia hubieren sido cometidos antes de la entrada en vigor del mismo.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Tratado.

Hecho en Roma el veintiocho de julio de dos mil once, en dos ejemplares originales en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**



**Marisela Morales Ibáñez
Procuradora General de la República**

**POR EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA ITALIANA**

**Nitto Francesco Palma
Ministro de Justicia**



**TRATTATO IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE
TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Il Governo degli Stati Uniti Messicani e il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti denominati "Parti Contraenti";

DESIDERANDO migliorare e rafforzare la cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale;

INTERESSATI ad assicurare che l'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti Contraenti si realizzi in modo rapido ed efficace, in conformità con i principi del diritto internazionale;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ambito dell'Assistenza Giudiziaria

1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale per l'accertamento ed il perseguimento dei reati, in conformità con le disposizioni del presente Trattato e le rispettive legislazioni nazionali.

2. Tale assistenza comprende, in particolare:

- a) la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;
- b) l'acquisizione di atti e documenti o, se così richiesto, l'informazione sul loro contenuto;
- c) l'assunzione di testimonianze e di interrogatori;
- d) l'effettuazione di perizie;

- e) le altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali;
- f) il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato;
- g) la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- h) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti affinché compaiano volontariamente dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- i) qualsiasi altra forma di assistenza, in conformità con le finalità di questo Trattato, sempre che non contrasti con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure coercitive.

4. Al compimento degli atti richiesti possono essere presenti rappresentanti dell'Autorità competente dello Stato Richiedente, che comunicherà i nomi e le cariche dei suoi rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'esecuzione della richiesta di assistenza giuridica al fine di consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari al riguardo.

5. Il presente Trattato non autorizza le Autorità competenti dello Stato Richiedente ad esercitare la giurisdizione o altre funzioni riservate esclusivamente alle Autorità dello Stato Richiesto in conformità alla sua legislazione nazionale.

ARTICOLO 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dalla legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata nei seguenti casi:
 - a) quando l'esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato Richiesto o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato o sia contraria agli obblighi internazionali dello Stato Richiesto;
 - b) quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato Richiesto;
 - c) quando il reato per il quale si procede è considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come reato esclusivamente militare o come reato politico o come reato connesso a un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
 - d) se lo Stato Richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali costituiscano il fondamento della domanda di assistenza o che la situazione della persona nei cui confronti si procede possa risultare pregiudicata da una qualsiasi di tali considerazioni;
 - e) se nei confronti della persona contro cui si procede è già stata emessa una sentenza definitiva per lo stesso fatto dallo Stato Richiesto, sempre che la persona non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;

- f) se lo Stato Richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda di assistenza possa arrecare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali;
- g) se la domanda di assistenza non rispetta i requisiti di cui al presente Trattato.

2. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un'indagine o un giudizio penale in corso nello Stato Richiesto. Questo Stato, comunque, può proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.

3. Se lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria ne informa immediatamente lo Stato Richiedente, motivando il rifiuto o il rinvio.

4. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto a rispettarle.

5. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come argomento per rifiutare l'assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 4

Esecuzione della Domanda di Assistenza Giudiziaria

1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformità con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato.

2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi.

3. Se lo Stato Richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Richiesto lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.

ARTICOLO 5

Immunità e Prerogative

1. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso l'Autorità Centrale.

2. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché le autorità competenti dello Stato Richiedente decidano al riguardo.

ARTICOLO 6

Riservatezza e Limiti nell'Impiego delle Informazioni

1. Gli Stati mantengono la riservatezza riguardo alla domanda di assistenza e agli atti relativi.

2. Lo Stato Richiedente non utilizza alcuna informazione, atto o documento ottenuti nell'esecuzione del presente Trattato per finalità diverse da quelle specificate, a meno che non richieda il consenso dello Stato Richiesto, il quale può concedere o rifiutare, in tutto o in parte, quanto richiesto.

ARTICOLO 7

Notificazione di Atti

1. Lo Stato Richiesto notifica senza ritardo tutti i documenti che gli sono trasmessi a tal fine.

2. La domanda volta alla notificazione di atti è trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui gli atti devono essere espletati.

3. Lo Stato Richiesto attesta l'esecuzione della notificazione per mezzo di un documento di consegna, datato e firmato dal destinatario, o per mezzo di una dichiarazione dell'Autorità competente dello stesso Stato Richiesto che dà atto del fatto, della data e della forma di notificazione e consegna.

ARTICOLO 8

Trasmissione di Atti

1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, lo Stato Richiesto ha la facoltà di trasmetterne copie autenticate, salvo che lo Stato Richiedente chieda gli originali.

2. I documenti e gli atti originali trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto non appena possibile, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 9

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato.

3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.

4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

ARTICOLO 10

Comparizione di Persone nel Territorio dello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto acquisisce nel suo territorio, in conformità con la sua legislazione nazionale, le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti, gli atti, i documenti, le cose e le altre prove menzionate nella domanda di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.

2. Previa domanda dello Stato Richiedente, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione, informa l'Autorità Centrale dell'altro Stato della data, dell'ora e del luogo in cui si realizzerà l'assunzione della testimonianza o della prova.

3. Al fine di eseguire la domanda di assistenza giudiziaria, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto avverte, mediante citazione, la persona di cui si richiede la presenza perché sia sentita o presenti documenti o cose, procedendo con le stesse modalità che adotta per le indagini o i giudizi secondo la propria legislazione nazionale.

4. La persona da ascoltare è coadiuvata in caso di necessità da un interprete e può avvalersi della facoltà di non rispondere che sia eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente.

5. Lo Stato Richiedente adempie ad ogni condizione concordata con lo Stato Richiesto relativamente ai documenti o cose che questo gli consegna, ivi compresa la tutela del diritto di terzi su tali documenti e cose.

ARTICOLO 11

Comparizione di Persone nel Territorio dello Stato Richiedente

1. Quando lo Stato Richiedente richiede la comparizione, in qualità di testimone, parte offesa, persona sottoposta a procedimento penale, perito, di una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto, per il compimento di atti processuali dinanzi alle Autorità competenti di esso Stato Richiedente, lo Stato Richiesto invita la persona a comparire secondo la domanda di assistenza giudiziaria formulata.

2. La persona, quando si trova nel territorio dello Stato Richiedente, gode delle seguenti garanzie:

- a) non si applicherà nessuna misura coercitiva o sanzione nel caso in cui essa non compaia dinanzi all'Autorità competente;
- b) non sarà processata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale dallo Stato Richiedente per qualsiasi fatto delittuoso commesso precedentemente alla sua partenza dal territorio dello Stato Richiesto. Tuttavia, sarà responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale che renda. Tale garanzia non si applica se la persona, essendo libera di abbandonare il territorio dello Stato Richiedente, non lo abbandona entro un periodo di trenta giorni dopo che le sia stato comunicato ufficialmente che la sua presenza non è più necessaria ovvero se, essendo partita, fa rientro volontariamente nel territorio dello Stato Richiedente;
- c) non sarà obbligata a rendere dichiarazioni in altri procedimenti diversi da quello cui si riferisce la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Lo Stato Richiesto informa la persona da trasferire mediante una citazione che deve contenere l'indicazione delle garanzie di cui al paragrafo che precede e l'informazione che le spese del trasferimento saranno a carico dello Stato Richiedente.

4. Lo Stato Richiesto non può applicare sanzioni né adottare alcuna misura coercitiva nei confronti della persona che non compaia in ottemperanza alla citazione.

ARTICOLO 12

Comparizione Mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che l'audizione sia effettuata mediante videoconferenza.

2. La comparizione mediante videoconferenza può essere altresì richiesta per l'interrogatorio di persone sottoposte a procedimento penale in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto. In questo caso il difensore può essere presente o nel luogo in cui si trova la persona che compare o dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente, nel qual caso deve poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza viene sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, nella misura delle possibilità tecniche dello Stato Richiesto.

4. Le spese per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente allo Stato Richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci in tutto o in parte al rimborso.

ARTICOLO 13

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 12, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, sulla base di un preventivo accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

- a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
- b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione;
- c) La persona detenuta vi acconsenta, nel caso si debba procedere al suo interrogatorio.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.

6. Per gli effetti di questo Articolo restano applicabili le disposizioni di cui all'Articolo 11, paragrafo 2.

ARTICOLO 14

Protezione di Persone Citate o Trasferite alla Parte Richiedente

Quando sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio.

ARTICOLO 15

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

ARTICOLO 16

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore o che erano precedentemente in vigore e sulle procedure giudiziarie in uso nei rispettivi paesi.

ARTICOLO 17

Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.

2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale vengono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità competenti dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 18

Domande di Assistenza

1. L'assistenza è fornita su domanda scritta dello Stato Richiedente.

2. Lo Stato Richiesto dà luogo immediatamente all'esecuzione della domanda di assistenza non appena la riceve via fax, posta elettronica o altro analogo mezzo di trasmissione telematica. Lo Stato Richiedente trasmette l'originale della domanda entro i dieci giorni successivi. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente degli esiti dell'esecuzione della domanda di assistenza soltanto dopo aver ricevuto l'originale della domanda stessa.

3. La domanda deve indicare:

- a) l'Autorità competente che formula la richiesta di assistenza;
- b) i dati dell'indagine e del giudizio a cui si riferisce la richiesta e i dati identificativi della persona nei cui confronti si procede;
- c) gli atti il cui compimento è richiesto;
- d) la descrizione dei fatti materia di indagine o di giudizio;
- e) le disposizioni penali applicabili al caso;
- f) qualsiasi altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti e, in particolare, l'identità e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
- g) le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, oltre alle generalità delle Autorità e delle parti private che possano prendervi parte;

- h) il termine entro il quale lo Stato Richiedente considera più opportuno che la domanda di assistenza sia eseguita;
- i) l'eventuale richiesta che rappresentanti delle Autorità competenti dello Stato Richiedente siano presenti al compimento degli atti richiesti.

4. La domanda di assistenza contiene anche, nella misura possibile, le informazioni su:

- a) il nome completo, la data di nascita, il domicilio, il numero di telefono delle persone alle quali deve essere effettuata una notificazione e il loro rapporto con l'indagine o il giudizio in corso;
- b) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire o ispezionare;
- c) l'ubicazione e la descrizione dei beni da sequestrare o confiscare;
- d) le domande da formulare al testimone o al perito;
- e) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per lo Stato Richiesto nell'esecuzione della domanda di assistenza.

5. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

ARTICOLO 19

Modalità di Trasmissione

1. Le domande di assistenza giudiziaria sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali dei rispettivi Stati.

2. L'Autorità Centrale per gli Stati Uniti Messicani è la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica. L'Autorità Centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale tramite il canale diplomatico.

ARTICOLO 20

Lingua

Le domande di assistenza giudiziaria nonché gli atti e i documenti allegati devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto e dovranno recare la firma e il timbro dell'Autorità competente dello Stato Richiedente.

ARTICOLO 21

Spese

Restano a carico dello Stato Richiesto le spese da questo sostenute per la prestazione dell'assistenza, salvo quanto previsto dall'Articolo 11, paragrafo 3, e dall'Articolo 12, paragrafo 4, del presente Trattato.

ARTICOLO 22

Rapporti con Altri Strumenti Internazionali

Il presente Trattato si applica fatte salve quelle disposizioni che risultino più favorevoli e siano contenute in altri strumenti internazionali bilaterali o multilaterali vigenti tra le Parti Contraenti e le eventuali disposizioni più favorevoli di assistenza giudiziaria in materia penale che vengano stabilite nella legislazione nazionale degli Stati.

ARTICOLO 23

Altri Strumenti di Cooperazione

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici e ai trattati internazionali a cui le parti aderiscono.

ARTICOLO 24

Soluzione di Controversie

1. Le Autorità Centrali dei due Stati, su proposta di uno di essi, svolgeranno consultazioni in materia di interpretazione o applicazione delle disposizioni del Trattato.

2. Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.

3. Qualora esse non raggiungano un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

ARTICOLO 25

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà il corso delle procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4 Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati in relazione ai quali si richiede l'assistenza sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma, Italia, il ventotto luglio duemilaundici, in due originali, ciascuno nelle lingue spagnola e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI MESSICANI**



**Marisela Morales Ibáñez
Procuratrice Generale della
Repubblica**

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

**Nitto Francesco Palma
Ministro della Giustizia**

